

**ST 17 – A DITADURA CIVIL-MILITAR BRASILEIRA (1964-
1988) EM NOVOS OLHARES E ABORDAGENS**

A indústria da televisão brasileira nos primeiros anos da ditadura cívico-militar (1964-1968)

The Brazilian television industry in the early years of the civic-military dictatorship (1964-1968)

Berenice Hernández Pérez¹

Tras el golpe cívico-militar asestado contra el gobierno de João Goulart en marzo de 1964 y que llevo a la presidencia al general Castelo Branco en abril de ese mismo año, dio comienzo una era dictatorial en la que los militares ejercieron un terrorismo de Estado que estuvo amparado por los presupuestos ideológicos de la Doctrina de Seguridad Nacional. En el marco de este conflicto ideológico, la población brasileña (al igual que la de otros países del sur del continente como Argentina, Uruguay y Chile) fue forzada a suspender sus derechos ciudadanos, tanto de manera individual como colectiva, en función de una política de seguridad nacional que se encontraba en guerra abierta y permanente contra un enemigo que no sólo se hallaba en el exterior, sino también dentro de sus propios dominios.²

¹ Doutoranda em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Contato: berenicehepe@gmail.com

² Al respecto, Nilson Borges señala que la principal razón de la figura del enemigo interno era para mantener la cohesión y el espíritu de cuerpo del grupo que se encontraba en el poder (2003, p. 30).

En el año del golpe cívico-militar existían en Brasil 34 estaciones de televisión y más de 1.8 millones de aparatos receptivos. En octubre había tenido lugar el III Congreso Brasileño de Radiodifusión, en Río de Janeiro, y en éste se había elaborado y aprobado el primer Código de Ética de Radiodifusión en el país.³ Para 1965, el gobierno militar creó la Empresa Brasileña de Telecomunicaciones (Embratel) apoyados en la misma Ley que instituyó el Código Nacional de Telecomunicaciones de 1962 (expedido durante el gobierno de João Goulart). También se creó el Departamento Nacional de Telecomunicaciones (Dentel), que fue el encargado de gestionar la concesión de licencias de radio, televisión y otros servicios de telecomunicaciones; así como de coordinar, orientar, implementar, supervisar y controlar la aplicación de las leyes y normas relacionadas al sector.

Más tarde, el Decreto 56.552 (8 de agosto) creó el Contel y éste fue el encargado de supervisar a las emisoras de radio y televisión, así como de reglamentar y censurar el contenido de su programación. Sin embargo, como Contel se mostró incapaz de hacer una censura política sistemática, la tarea fue transmitida eventualmente al Departamento Federal de Seguridad Pública; a través de un acuerdo interno autorizado por el gobierno central.

La Portaria 312, que oficializó tal acuerdo, fue promulgada por Contel y estableció normas sobre las cuales aquel departamento debería controlar la radio y la televisión.

³ Cabe señalar que este Código se mantuvo vigente hasta 1980 (MATTOS, 2010, p. 205).

Mientras Contel estableció 23 tipos de transgresiones relacionadas al comportamiento moral y político, así como las respectivas penalidades a ser aplicadas a los programadores; la Portaria estableció normas para clasificar programas de acuerdo con: sensualidad; vulgaridad; problemas familiares y religiosos; falta de espíritu cívico; presentación de una mentira bien lograda; premio a la pereza y la deshonestidad; incumplimiento de los deberes; desvalorización del amor, de la tierra natal y del pueblo brasileño; estímulo a los sentimientos de rivalidad, venganza y lucha de clases; estímulo de las luchas sobre cuestiones raciales y de nacionalidad.⁴

Por otro lado, en ese año el país se asoció a la Organización Internacional de Satélites y Telecomunicaciones (Intelsat) y ello conllevó a que, para 1969, Brasil instalase su primer sistema satelital (el Tanguá-I). Además, en 1965 también tuvo lugar uno de los acontecimientos más relevantes dentro de los anales de la historia de la televisión brasileña: la inauguración de la primera emisora de TV Globo (26 de abril en Río de Janeiro).⁵ Roberto Marinho, quien era dueño de la red impresa del grupo Globo, había participado junto con Assis Chateaubriand, el gran pionero y promotor de la industria televisiva brasileña, en la “Feira de Amostras do Rio de Janeiro de 1939”; en donde tuvo lugar la primera exhibición de dicho artefacto en el país.

⁴ A juicio de Othon Jambeiro, “A Portaria foi a primeira expressão dos valores morais da ditadura militar relacionados com a radiodifusão.”(2002, p. 82).

⁵ Aunque dicha compañía había recibido la concesión para operar un canal de televisión desde la administración del presidente Juscelino Kubitschek (Decreto N. 42.946 del 12 de diciembre de 1957), no fue sino hasta mediados de la década de los 60’ que la empresa comenzaría sus transmisiones.

A partir de esta experiencia, Marinho tuvo la oportunidad de diseñar una estrategia para incursionar en el mundo de la ya por entonces consolidada industria televisiva brasileña y el resultado de ello fue el acuerdo que suscribió con el grupo estadounidense *Time-Life* en 1962. Dicho acuerdo fue establecido como un contrato de asistencia técnica, ya que la legislación brasileña prohibía a cualquier empresa extranjera el participar en la dirección intelectual y administrativa de una empresa licenciada para operar servicios de televisión.⁶ Más allá del monto que invirtió el grupo *Time-Life* en TV Globo, lo interesante aquí es que dicha asociación dotó a la empresa con los conocimientos técnicos, publicitarios y estructurales del modelo televisivo estadounidense.⁷

Desde que arrancó sus transmisiones, TV Globo mantuvo buenas relaciones con las diferentes administraciones militares y ello le valió la concesión de permisos para expandir su red, pues la política económica del gobierno militar estaba encaminada a favorecer la concentración del capital y la generación de corporaciones. El 24 de marzo

⁶ De acuerdo con Othon Jambeiro, "O acordo estabelecia que o grupo *Time-Life* daria à Globo apoio técnico na implantação de moderna administração, daria novos métodos e habilidades em programação, novos programas, atividades de interesse público, controle financeiro, orçamentário e contábil, desenvolvimento e especificações de equipamentos, engenharia, treinamento e dimensionamento da equipe, organização comercial, técnica e administrativa e o funcionamento de uma estação de TV.

Além disso, a *Time-Life* daria suporte à TV Globo na compra de programas e consecução de publicidade nos EUA."(2002, pp. 97-98).

⁷ Sin embargo, en 1968 la Comisión Parlamentaria de Investigación que se creó para la revisión de este acuerdo concluyó que el mismo violaba los preceptos establecidos en las leyes del país y, por ende, el gobierno militar dictó un plazo de 90 días a TV Globo para que regulase su situación. La televisora finalizó inmediatamente su contrato con *Time-Life* y no sólo vendió su principal edificio a dicho grupo, sino que también comenzó a pagar 45% de sus beneficios netos a manera de renta.

de 1966, TV Globo comenzaba las transmisiones de su segunda emisora con sede en São Paulo y ya para finales de la década la empresa se consolidó como red nacional de comunicaciones, cuando sus programas comenzaron a ser transmitidos simultáneamente en varias ciudades a través de microondas.

Por otro lado, en julio de 1966, el Servicio de Censura de Diversiones Públicas del Departamento Federal de Seguridad Pública establecería nuevas normas para la censura de los programas de televisión. El Congreso, por su parte, había aprobado la Ley 5.070 (reglamentada en marzo de 1967 por el Decreto N. 60.430), con la cual se creaba el Fondo de Fiscalización de las Telecomunicaciones (Fistel). De esta forma, todos los tipos de telecomunicaciones autorizadas, incluidas las transmisiones de radio y televisión, tenían que pagar una tasa anual en el mes de marzo. El objetivo del impuesto era financiar la supervisión de las transmisiones y de los servicios de telecomunicaciones, así como la elaboración y ejecución de proyectos que perfeccionasen dichas actividades de supervisión (JAMBEIRO, 2002, p. 83-84).

Para el primer semestre de 1967, el gobierno militar había expedido una nueva constitución para reforzar y asegurar su estancia en el poder. Con la llegada a la presidencia del general Arthur da Costa e Silva el 15 de marzo de ese año, la nueva carta magna entraba en vigor mientras que el ala más radical de la milicia brasileña tomaba las riendas del país. Una nueva Ley de Seguridad Nacional fue concebida para legitimar las acciones del Estado Dictatorial y, por ende, a diferencia de la constitución de 1946, el Consejo de Seguridad Nacional dejaba de tener por tarea la defensa del país para

ocuparse de la política de seguridad nacional (BORGES, 2003, p. 38). Además, la nueva constitución criminalizaba aquello que fuese entendido como “propaganda de subversión al orden”, al tiempo que designaba a la Policía Federal como encargada de la censura en los medios de comunicación y los espectáculos (JAMBEIRO, 2002, p. 84).

El SNI, que sería una pieza clave en la consolidación del Estado Dictatorial, llegó a contar con un nuevo reglamento en ese año y ello le valió una gran ampliación de su estructura. De esta forma, se transformaron las antiguas secciones de seguridad nacional de los ministerios civiles en Divisiones de Seguridad e Informaciones (DSIs) y se crearon las Asesorías de Seguridad e Informaciones (ASIs). En lo que concierne a los medios de comunicación, la tradición nacionalista se mantuvo y por ello ningún extranjero (incluidos los naturalizados) podía administrar o controlar ningún ramo de esta industria. La nueva constitución también había autorizado al Congreso para reorganizar, de ser necesaria, la estructura y la operación de los medios de comunicación en interés del régimen.⁸

En este sentido vale la pena señalar que, desde finales de febrero y amparados por el Acto Institucional N. 4, el gobierno militar expidió el Decreto N. 236 por el cual el Código Brasileño de Telecomunicaciones fue modificado. De esta forma, se dictaron nuevas normas para el otorgamiento de concesiones de canales de radio y de televisión (por las cuales ninguna persona jurídica o foránea podía dirigir empresas de

⁸ De acuerdo con Othon Jambeiro, “Isto era uma óbvia ameaça aos mídia, que poderiam ter suas condições de trabalho modificadas a qualquer momento por um Congresso na época extremamente dócil à vontade do governo militar.”(JAMBEIRO, 2002, p. 85).

radiodifusión), al tiempo que se restringió el número de estaciones televisivas que podían ser propiedad de una misma persona. Se acordó que cualquier individuo podía recibir la concesión para operar directamente hasta 10 canales, aunque sólo 5 podían ser de VHF. Además, no estaba prohibida la filiación de los canales a las redes (JAMBEIRO, 2002, p. 84).

Ese año también fue creado el Ministerio de Comunicaciones, el cual limitó la participación de las organizaciones privadas sobre las agencias reguladoras, al tiempo que reforzó la influencia oficial en el sector.⁹ Al contar con una estructura única que les permitiese controlar y operar las actividades de comunicación, los militares no tardaron en transferir a dicho órgano los poderes del Contel y del Dentel. Así, el nuevo ministerio se apropió del derecho de conducir los procesos de concesión, permisos y renovación de los servicios de telecomunicaciones;¹⁰ aunque la figura presidencial continuaba siendo la única autorizada para conceder canales de radio y televisión.

En 1967 también se llevaron a cabo los primeros estudios para la implementación de un sistema doméstico de comunicaciones vía satélite. El proyecto de Satélites Avanzados de Comunicaciones Interdisciplinares (Saci) fue concebido para fines de teleeducación. En este sentido vale la pena señalar que, desde el 3 de enero de ese año,

⁹ A juicio de Sergio Mattos, "Isso facilitou a ingerência política nos meios de comunicação, evidenciada até mesmo nos conteúdos veiculados e sempre sobre a justificativa de um control técnico." (MATTOS, 2000, p. 104).

¹⁰ Aunque esa ya venía siendo tarea del Contel a partir del Decreto N. 200 que se expidió en ese año, este poder fue oficialmente retirado a los estados (JAMBEIRO, 2002, p. 86).

el gobierno militar expidió la Ley N. 5.198; por la cual quedó instituida la TV Educativa al crear el Centro Brasileño de TV Educativa, cuyo objetivo era el de producir, comprar y distribuir programas de carácter educativo. Más tarde en el mes de octubre fue expedido el Decreto N. 59.366, por el cual quedó instituido el Fondo de Financiamiento de Televisión Educativa.¹¹

Hacia finales de 1968 (13 de diciembre), todavía con el general Artur da Costa e Silva en la presidencia, el Acto Institucional N. 5 (AI-5) fue publicado y, de esta forma, el Congreso fue puesto en receso al tiempo que al poder ejecutivo se le otorgaron poderes extraordinarios. Además, se suspendieron los derechos políticos del ciudadano y, entre otras cosas, se terminó con la garantía del Hábeas Corpus; con lo cual se simplificaron los trámites para el encarcelamiento de aquellas personas que resultasen sospechosas para el régimen. Con su publicación, la Doctrina de Seguridad Nacional se consolidó y desde ese momento comenzaría una nueva etapa que sería considerada como “el golpe dentro del golpe”. Tras su expedición se posibilitaría una actividad de censura más sistemática por parte del régimen, así como una estructura represiva mucho más organizada con el surgimiento de los Destacamentos de Operações de Informações

¹¹ Esta no era la primera vez que el Estado prestaba atención al área educativa dentro de la oferta televisiva, ya que desde el gobierno de Kubitscheck se registró la separación entre las emisoras de radiodifusión y sus finalidades educativas (JAMBEIRO, 2002, p. 58). De hecho, a comienzos de la década comenzaron a circular programas de esta índole tales como el *Telecurso*, transmitido en 1960 a través de la TV Cultura de São Paulo, y el *Curso de Madureza*, transmitido en 1962 por TV Educativa; el cual llegó a ser uno de los primeros proyectos transmitidos de manera simultánea tanto por TV Continental de Río de Janeiro como por TV Tupi Difusora de São Paulo (MATTOS, 2000, p. 92).

(DOIs), que eran unidades encargadas de perseguir e interrogar a todo aquel que resultase sospechoso; además de los Codis, cuya tarea era coordinar los DOIs (JOFFILY, 2014, pp. 162-163).

Cuando los militares tomaron el poder en marzo de 1964, en el país había cerca de 2 millones de aparatos televisivos. Para 1968 el gobierno militar había introducido una política de crédito que permitía a la población adquirir un aparato televisivo en 12, 24 y hasta 36 meses; por lo que para 1969 el número aumentó a 4 millones y para 1970 se llegó a tener un registro de 5 millones de televisores en el país. Fue en 1968, precisamente, cuando se publicó el Decreto-Ley N. 486 que exentaba de las tasas de importación a los equipos, partes y piezas de reposición para instalación y manutención de las estaciones de radio y televisión con una sola condición: que fueran importados directa y exclusivamente por los beneficiarios de la concesión (JAMBEIRO, 2002, p. 80; MATTOS, 2000, p. 102).

Tras el golpe militar, el crecimiento del país se pensó a través de una rápida industrialización apoyada en tecnología y capitales externos. En esa época, el presupuesto nacional destinado a la publicidad se acrecentó y ello terminó impactando en la industria televisiva que se fortaleció. El medio de comunicación fue utilizado rápidamente para promover el desarrollo del sistema capitalista al emplearse para fomentar la venta de bienes y servicios, además de ser utilizado como promotor de ideas. En poco tiempo, la industria televisiva brasileña fue dependiendo cada vez más de los anunciantes extranjeros, pues las empresas transnacionales que llegaron a invertir en el

país se transformaron en los empleadores más importantes del medio (JAMBEIRO, 2002, p. 94; MATTOS, 2000, p. 103).¹²

La idea de que los programas de televisión debían ajustarse a la rutina de los horarios de trabajo y de placer en una casa se consolidó en Brasil. El público por excelencia era la familia, por lo que los instrumentos de estandarización de la audiencia enfocaron sus sondeos en conocer los horarios y las rutinas familiares. Basados en los patrones sociales, económicos y culturales de Río de Janeiro y São Paulo, las emisoras televisivas buscaron unificar a las heterogéneas audiencias televisivas del país tomando como referencia esos padrones urbanos (JAMBEIRO, 2002, p. 91; BERGAMO, 2010, p. 64).

El interés que el gobierno militar ya tenía en el área de las comunicaciones puede verse expresado en el Decreto nº. 62.119, expedido el 15 de enero de ese año, con el cual se creó la Assessoria Especial de Relações Públicas (Aerp), cuya tarea estaba destinada a controlar la propaganda política del gobierno militar. Su primer jefe sería el coronel Hernani d'Aguiar, quien había sido jefe de la oficina del general Costa e Silva cuando éste se declaró candidato a la sucesión presidencial del general Castelo Branco.

¹² Como lo señala Othon Jambeiro, "... a TV no Brasil cresceu em paralelo com a concentração do capital, a internacionalização do mercado interno e a convergência geográfica da produção industrial na região Centro-Sul do país. Além disso, a política econômica do regime militar, voltada para a criação de um mercado nacional para produtos industrializados, fortaleceu e foi fortalecida pela expansão nacional da indústria televisiva, facilitada pela construção de uma rede nacional de telecomunicações." (JAMBEIRO, 2002, p.89).

Como encargado del Aerp, d'Aguiar estimuló y patrocinó la producción de campañas de fuerte cuño oficial que enaltecían al país de manera patriótica, pues la idea era mostrar un “Brasil Grande” y un gobierno emprendedor. Justamente en octubre de ese año, los participantes de un seminario convocado por la Aerp concluyeron que la imagen del gobierno era mala. Por tal motivo, el órgano propuso iniciativas que desviasen la atención del público para hechos notables como los concursos de estudiantes o la promoción de eventos del tipo “Brasil Grande”, entre otros (FICO, 2003, pp. 194-195).

Referências

BERGAMO, Alexandre. A reconfiguração do público. In: RIBEIRO, Ana Paula Goulart; SACRAMENTO, Igor; ROXO, Marco (Edit.). *História da televisão no Brasil: do início aos dias de hoje*. São Paulo: Contexto, 2010.

BORGES, Nilson. A Doutrina de Segurança Nacional e os governos militares. In: FERREIRA, Jorge; NEVES DELGADO, Lucilia de Almeida (Edit.). *O Brasil Republicano Vol. 4: O tempo da ditadura: regime militar e movimentos sociais em fins do século XX*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

FICO, Carlos. Espionagem, polícia política, censura e propaganda: os pilares básicos da repressão. In: FERREIRA, Jorge; NEVES DELGADO, Lucilia de Almeida (Edit.). *O Brasil Republicano Vol. 4: O tempo da ditadura: regime militar e movimentos sociais em fins do século XX*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

JAMBEIRO, Othon. *A TV no Brasil do século XX*. Salvador: Editora da Universidade Federal da Bahia, 2002.

JOFFILY, Mariana. O aparato repressivo: da arquitetura ao desmantelamento. In: REIS, Daniel Aarão; RIDENTI, Marcelo; SÁ MOTTA, Rodrigo Patto (Organização). *A ditadura que mudou o Brasil. 50 anos do golpe de 1964*. Brasil: Zahar, 2014, pp. 162-163.

MATTOS, Sérgio. *A televisão no Brasil: 50 anos de história (1950-2000)*. Salvador-Bahia: Editora PAS, 2000.

_____. *História da Televisão Brasileira. Uma visão econômica, social e política*. Petrópolis: Editora Vozes, 2010.

Morreu na contramão atrapalhando o tráfego”: Trabalhadores e sinistralidade laboral na grande Imprensa

“He died against the grain hindering traffic”: Workers and occupational accidents in
the major press

Ciro Caleb Barbosa Gomes¹

Introdução

Não obstante se tenha conhecimento da importância da classe trabalhadora para o crescimento econômico e o desenvolvimento nacional, assim como no processo histórico de lutas e resistências em face de sua exploração, ainda é parco o número de pesquisas que se dedicam ao estudo da presença e atuação dos trabalhadores e de suas entidades representativas de classe durante os anos que marcaram a ditadura empresarial-militar no Brasil (1964-1985).

Silva (2018, p. 17) acentua que durante o período ditatorial, diferentes temáticas têm sido objeto de análises da historiografia a nível nacional e local, no que toca as violações aos direitos humanos, as modificações sociais, políticas e econômicas, a censura à imprensa e aos setores progressistas da Igreja ou mesmo a luta do movimento estudantil e dos grupos armados, dentre inúmeras outras. Todavia, a investigação das condições em que se encontrava a classe trabalhadora

¹ Graduando do curso de Licenciatura em História na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), campus I em João Pessoa (PB). Integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas em História do Trabalho (GEPEHTO/UFPB) e Bolsista PIBIC/UFPB. Contato: calebs_ciro@hotmail.com; ciro.barbosa@academico.ufpb.br

no que ficou conhecido como “novo sindicalismo”, no fim da década de 1970 e início de 1980, ainda é muito recente na bibliografia acadêmica, ponderando-se o visível processo de apagamento da presença dos trabalhadores nas análises mais hodiernas do período.

Como revela Correa (2016, p. 130), a apuração final das pesquisas conduzidas pela Comissão Nacional da Verdade (CNV) trouxe à luz uma série de documentos e questões novas, provando que o golpe deflagrado em 1964 encetou um período de profunda coerção e exploração dos trabalhadores como uma maneira de acelerar o processo de produção capitalista com os mais altos índices de violência política, além de uma maior extração de mais-valor no menor espaço de tempo. Dessa maneira, na cidade e no campo, as elites civis entendiam que era preciso reprimir, disciplinar, submeter e tornar os trabalhadores mais produtivos, com o fim de possibilitar uma maior acumulação de riqueza, bem como manter os privilégios existentes.

Em princípio, cabe-se destacar que a elevação da produtividade do trabalhador brasileiro ao longo do chamado “milagre econômico” não se deu em razão de investimentos em máquinas e instrumentos de trabalho, e sim pelas rupturas nas relações trabalhistas impostas pela política de desenvolvimento do regime, marcada pela “Ordem e produtividade”, em direção ao progresso econômico reservado a poucos, por conta da maioria.

Perante esses pressupostos e partindo da inteligência da ditadura militar a partir de seu caráter de classe, dos benefícios ao grande capital em agravo das

V Encontro Discente de História da UFRGS, Porto Alegre, v. 13, n. 29, janeiro 2022

condições de saúde e de vidados trabalhadores, o presente trabalho elege como aspecto central o de compreender a partir da visão da grande imprensa, especialmente do jornal “*O Estado de São Paulo*” (*OESP*), como o periódico se posicionava e o que veiculava com relação aos mundos do trabalho e a sinistralidade laboral nesse contexto de Estado autoritário, concebendo que o estudo dos acidentes, adoecimento e mortes em decorrência do trabalho se mostram como as formas mais violentas e acabadas da exploração e infaustas condições de vida da classe trabalhadora.

Destarte, o trabalho igualmente intenta avaliar as possibilidades e limites do uso dos periódicos para a pesquisa histórica, compreender como os posicionamentos políticos e as linhas editoriais dos jornais variam e são influenciados por diversos elementos, a exemplo do grupo proprietário, dos interesses dos patrocinadores, bem como pela conjuntura nacional e o avanço do cerceamento das liberdades perpetrado pelo regime militar, destacar temáticas relevantes, acontecimentos e problemas que tiveram maior destaque ao longo do tempo e qual tratamento receberam pelo *OESP*, atentando para o conhecimento factual e analítico consolidado pela historiografia.

Metodologia

Em concordância com De Luca (2015, p. 112), apesar de uma fonte já consuetudinária nas pesquisas históricas, o uso de periódicos nem sempre teve o apreço dos que constroem a ciência histórica. Consequentemente, seu emprego

requisita uma série de cuidados e procedimentos teórico-metodológicos, pois longe de “permitirem captar o ocorrido”, reconhecendo seus limites, estas fontes propeliram estudos historiográficos cardeais, sobre as mais diversas temáticas, o que hoje não justifica que sejam tratadas como fonte de baixa estirpe. Para tanto, se faz premente uma compreensão global dos periódicos como fonte de pesquisa e da história da imprensa no Brasil (SODRÉ, 1983; MARTINS, 2018; DE LUCA, 2015) e mais notadamente a respeito da imprensa durante a ditadura militar (SOARES, 1989; KUSHNIR, 2012; MACHADO, 1978; MARCONI, 1980), com enfoque no que era permitido pelo regime ditatorial de ser veiculado e de que forma poderia ser transmitido.

No que concerne ao exercício de pesquisa documental e considerando a opção pela utilização de periódicos anteriormente exposta, o material em estudo envolveu as edições do veículo jornalístico da grande imprensa “*O Estado de São Paulo*” (OESP) ao longo da década de 1970, acedidas através do acervo digital de OESP no *site* <https://acervo.estadao.com.br/>, sendo dessa maneira as reportagens selecionadas, agrupadas e categorizadas para melhor visualização e manejo em planilhas no Excel, onde a documentação alvo da pesquisa foi identificada no acervo mediante a busca por palavras-chave ou *tags* específicas elaboradas para o projeto de pesquisa, como por exemplo “acidentes de trabalho”, “grandes obras” “INPS”, “Previdência Social”, etc.

É preciso mencionar também que no processo de procura valendo-se das palavras-chave, nem todos os resultados encontrados corresponderam aos

V Encontro Discente de História da UFRGS, Porto Alegre, v. 13, n. 29, janeiro 2022

objetivos e recorte específico da pesquisa, não sendo assim considerados no levantamento dos dados por se distanciarem do objeto em questão.

As matérias analisadas ainda foram qualificadas por título, data de publicação, edição do periódico, veículo, paginação, autoria, origem e local da matéria, síntese do conteúdo da reportagem, atores sociais existentes, presença de imagens e a descrição destas, link para acesso e legislação pertinente aferida no material.

Resultados e discussões

Preliminarmente, faz-se inescusável situar de forma breve a fonte das quais foram obtidos os resultados a serem expostos e analisados. O periódico “*O Estado de São Paulo*” (*OESP*), surgiu com a nomenclatura “*A Província de São Paulo*” em 04 de janeiro de 1875, deares claramente liberais e formado por um grupo de republicanos, os quais apoiavam à época de sua fundação o fim da monarquia e da escravidão.

À vista disso, foram analisadas 175 matérias do *OESP* ao longo de 165 edições no decênio dos anos 1970 que tratavam direta ou indiretamente sobre acidentes de trabalho (ATs) e mortes em decorrência do trabalho, política previdenciária, prevencionismo e reabilitação profissional na vigência da ditadura empresarial-militar no Brasil.

É sabido que a sinistralidade laboral registrada em fins da década de 1960 e início dos anos 1970 crescia em escalada, como confirma o gráfico 1 em relação ao registro de reportagens em *OESP* que tratam direta e indiretamente sobre acidentes de trabalho, consagrando o Brasil do chamado “milagre” também como o “campeão mundial de acidentes de trabalho”, à medida em que as consequências infaustas da

V Encontro Discente de História da UFRGS, Porto Alegre, v. 13, n. 29, janeiro 2022

exploração do trabalho eram verificadas em âmbito nacional e significavam a piora gradativa das condições de vida dos trabalhadores.

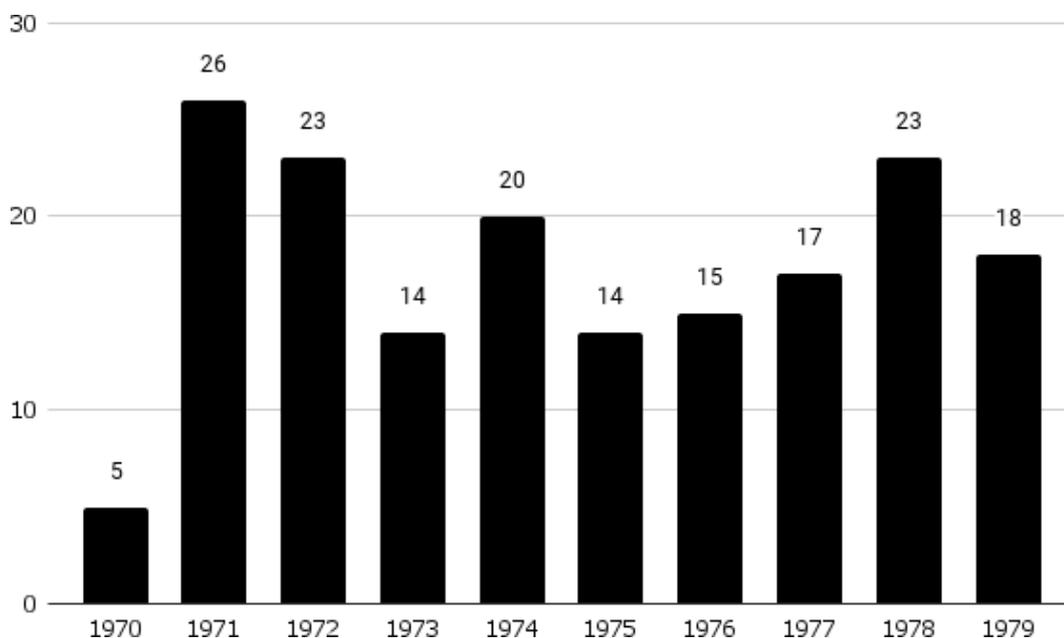


Gráfico 1. Reportagens que tratam direta e indiretamente sobre acidentes de trabalho em “*O Estado de S. Paulo*” no período 1970-1979.

Tal quadro se convalida tão verdadeiro que em matéria de 8 de agosto de 1974, *OESP* noticiou que a revista internacional “Saúde no Mundo” da Organização Mundial da Saúde (OMS), classificou o Brasil como um dos países que mais se destacavam pelas más condições de trabalho enquanto causa principal dos acidentes. Ainda informa, diante das justificativas de novas medidas em estudo no sistema previdenciário pelo secretário-geral do Ministério da Previdência Social, que no ano de 1972, 1 milhão e 470 mil operários foram vítimas de acidentes em seus locais de trabalho. Comparativamente, a Alemanha possuía 26 milhões de

trabalhadores registrados e a ocorrência de 2 milhões de acidentes.²

É válido também registrar que em matéria de 4 de agosto de 1976, intitulada “Prevenir acidentes no campo”, o *OESP* anunciou o Brasil na triste liderança mundial dos acidentes de trabalho registrando 1 milhão e novecentas mil ATs ao ano, e quase 3 mil mortes, no quais a maioria dessas sinistralidades aconteceu no ramo construção civil.³

As tentativas de mudanças na legislatura sobre acidentes de trabalho estampam a matéria de OESP em 1976, que vincula as críticas e insatisfação de dirigentes sindicais e trabalhadores paulistas ao projeto de lei do Executivo que propunha modificações na legislação vigente.

Ao analisar as reportagens do jornal que reproduzem a ideologia de prevenção de acidentes perpetradas durante a ditadura, é possível verificar, alicerçados no paradigma heinrichiano e na teoria do “fator humano”, a ocorrência do discurso dos ideólogos da segurança de culpabilização do trabalhador pelos acidentes. Tais discursos são ainda mais impulsionados e popularizados por órgãos governamentais como a Fundacentro. Silva (2019), destaca que esta instituição foi responsável pela disseminação da ideia de que, independente das condições inseguras, mais de 80% dos acidentes era resultado da imperícia ou ignorância dos trabalhadores, fundamentando ‘cientificamente’ a noção do ‘ato inseguro’.

A edição de 1º de outubro de 1978 com o título “Mais 15 anos para o trabalho

² Brasil lidera em acidente de trabalho. *O Estado de S. Paulo*. 8 ago. 1974, p. 18.

³ Prevenir acidentes no campo. *O Estado de S. Paulo*. 4 ago. 1976, p. 25.

ser seguro”, avoca uma entrevista com o professor Eduardo Gabriel Saad, superintendente da Fundacentro à época, onde o mesmo faz uso dos dados do conhecido especialista Herbert William Heinrich, apontando que, “49% dos acidentes são de responsabilidade do trabalhador é 51% são culpa do patrão (condições inseguras de trabalho)”. Saad ainda evidencia na entrevista que mesmo que exista evidente culpa do trabalhador, a empresa também deve ter responsabilidade. A matéria ainda se utiliza do espaço para reforçar o chamado “ato faltoso” ou “ato culposo” ao explicar os efeitos da Lei nº 6.514/1977 e discorrer acerca das diferenças entre legislação acidentária dos Estados Unidos e do Brasil ao tempo em que exhibe um gráfico com o comparativo percentual entre o número de trabalhadores segurados e o número de acidentes ocorridos.

A hipótese “monocausal” aliada a “consciência prevencionista” imposta pelo regime compunham elementos de construção de uma mentalidade que se pretendia a espalhar-se em propagandas, discursos oficiais e eventos do governo. Frederico (2010, p. 129), toca na importância de salientar outras causas para os acidentes de trabalho, ao mencionar a falta de equipamentos de segurança, o desligamento criminoso por parte da empresa de dispositivos automáticos de proteção presentes na maquinaria, no intuito de acelerar o ritmo de trabalho, a suspensão dos intervalos de descanso e a prorrogação da jornada de trabalho e a admissão paraterminadas tarefas de trabalhadores sem a requerida qualificação, comumente menores, em funções inadequadas à sua faixa etária.

Outrossim, o período ditatorial foi emblemático pela execução das grandes

obras desenvolvimentistas, que à medida que assinalavam a otimização e o incremento econômico nacional também revelavam o quanto tal impacto refletia-se no crescente índice de sinistros laborais. “Acidente esgota as verbas do país” era o destaque trazido pela matéria de *OESP* em julho de 1974, a qual noticiava de modo dramático que um em cada sete trabalhadores registrados pelo INPS se acidentava por ano, sendo este “um triste recorde mundial”⁴.

As obras de proporção vultuosa do regime militar além de movimentar a economia, também atraíam uma elevada massa de trabalhadores migrantes e com eles uma série de problemas sociais. Um dos exemplos de destaque diz respeito a construção da Ponte Rio-Niterói, executada pelo consórcio ECEX e como afirma Silva (2018), cujo escrutínio geral de sinistros nunca foi conhecido. Em 1970, como traz *OESP*, um acidente levou a óbito três engenheiros e cinco operários, revelando que tais ocorrências atingiam não somente “peões” das construções, como também profissionais de nível superior. Sem embargo, “o consórcio que constrói a ponte mantém em segredo o número de acidentes e de mortes e 18 é o número do qual a imprensa tem conhecimento”⁵.

As edições de *OESP* também dão destaque ao desabamento do pavilhão de exposições da Gameleira em fevereiro de 1971 em Belo Horizonte, que vitimou 69 operários que morreram soterrados, e que dessa forma ficou marcado como o maior acidente de trabalho de toda a ditadura militar (Silva, 2018, p. 157), e o maior da

⁴ Acidente esgota verbas do país. *O Estado de S. Paulo*. 18 jul. 1974, p. 18.

⁵ Grandes obras fazem o progresso, mas elevam acidentes de trabalho. *O Estado de S. Paulo*. 31 set. 1972. Edição Especial, p. 1; 5.

história do Brasil até Brumadinho. Até os dias de hoje, nenhum dos dependentes das vítimas fatais foi indenizado pelo estado⁶.

Paulatinamente, as matérias escrutinadas de *OESP* registraram com frequência outros grandes sinistros, notadamente na construção civil, a exemplo de quedas, desabamentos e explosões de grandes proporções, os quais mesmo em face da repercussão, eram tratados pelos órgãos oficiais do governo e pelas empresas e empreiteiras envolvidas como ocorrências casuais produto da imperícia das vítimas ou ainda parte infeliz da “marcha do desenvolvimento”, afinal como já apontava os versos de Vinícius de Moraes, “tem morrido um bocado de operário pra aliviar nosso calvário com a adutora de Guandu”⁷.

Conclusão

Frente ao crescimento das pesquisas e os desafios em torno da presença dos mundos do trabalho na ditadura militar brasileira, o presente trabalho, ao abordar a questão da sinistralidade laboral, dedicou-se a análise das matérias veiculadas pela grande imprensa no Brasil, com foco em *OESP*, no transcurso temporal de 1970 a 1979. Em virtude de este ser um periódico de vulto e relevância na imprensa, por sua circulação diária, pela sua abrangência no território nacional tendo a sua disposição

⁶ Cinquenta anos após desabamento do Pavilhão da Gameleira, não houve indenização. Portal de Notícias G1 -MG. 05 fev. 2021. Disponível em: <https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2021/02/05/cinquenta-anos-apos-desabamento-do-pavilhao-da-gameleira-nao-houve-indenizacao.ghtml>. Acesso em: set. 2021.

⁷ MORAES, Vinícius de. Crônica ‘Toadinha de Ano Novo’. In: Para uma Menina com uma Flor: crônicas. Rio de Janeiro: Editora do autor, 1966, p. 19.

equipes de reportagem e articulistas de diferentes centros do país e igualmente pela sua capilaridade entre o público leitor, ficou patente que *OESP* foi capaz de cobrir os acontecimentos que giravam em torno dos acidentes de trabalho de forma detalhada, franqueando espaço aos atores sociais envolvidos, como os representantes do governo, empresários e entidades operárias.

Nas coberturas feitas pelo jornal ainda foi possível verificar a contabilização das estatísticas divulgadas pelos órgãos oficiais em relação aos acidentes de trabalho, além do alinhamento em vários momentos da linha editorial de *OESP* com a narrativa de “desenvolvimento com segurança” propalada pelos militares, alicerçada na exploração dos trabalhadores e nas benesses dadas ao capital. O periódico também reproduziu em suas edições reportagens relativas às mudanças na legislação acidentárias e as políticas “prevencionistas” e de reabilitação profissional difundidas pelo regime em participação com empresas.

Nas matérias examinadas foram igualmente registrados acidentes em vários níveis, sejam de sinistros em obras de pequeno porte até grandes catástrofes laborais em obras de importância na ditadura militar, com a coleta de depoimentos dos envolvidos e a cobertura das apurações legais e decisões judiciais relativas aos casos.

Em vista disso, é necessário indicar que os estudos envolvendo as implicações dos acidentes de trabalho durante a ditadura empresarial-militar são reveladores não somente do período recente em questão, cingido de revisionismos, generalizações e falsas narrativas ainda em nossos dias, mas desvelam

principalmente as trajetórias e as vidas dos trabalhadores, até então desconhecidas, oficialmente silenciadas e proibidas (Thompson, 2012). É justamente sobre esses construtores do ontem, do hoje e do amanhã, marcados pela sua experiência de classe, que essa pesquisa se debruçou.

Referências

CORREA, Larissa Rosa; FONTES, Paulo Roberto Ribeiro. “As falas de Jerônimo”: trabalhadores, sindicatos e a historiografia da ditadura militar brasileira. *Anos 90*, v. 23, n. 43, p. 129-151, 2016. Disponível em:

<<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6719111>>. Acesso em: 15 set. 2021.

DE LUCA, Tania Regina. Fontes impressas. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla Bessanezi (Org.). *Fontes históricas*. 3ª ed., 2ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2015, p. 111-153.

FREDERICO, Celso. *A esquerda e o movimento operário*. A resistência à ditadura. São Paulo: d. Novos Rumos, 1987.

_____. *A imprensa de esquerda e o movimento operário: 1964-1984*. 1. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2010.

KUSHNIR, Beatriz. *Cães de Guarda: Jornalistas e censores, do AI-5 à Constituição de 1988*. São Paulo: Boitempo, 2012.

MACHADO, J. A. Pinheiro. *Opinião X Censura*. Rio de Janeiro: L & PM, 1978.

MARCONI, Paolo. *A Censura Política na Imprensa Brasileira (1968-1978)*. 2ª ed. São Paulo: Global, 1980.

MARTINS, Ana Luiza; DE LUCA, Tania Regina. *História da Imprensa no Brasil*. São Paulo: Contexto, 2018.

SILVA, Ana Beatriz Ribeiro Barros. “Ciganos da construção”: a divulgação de acidentes de trabalho na construção civil pela Imprensa durante a ditadura militar brasileira. *Saeculum–Revista de História*, n. 39, p. 149-166, 2018. Disponível em:

<https://www.academia.edu/47607863/_Ciganos_da_constru%C3%A7%C3%A3o_a_divulga%C3%A7%C3%A3o_de_acidentes_de_trabalho_na_constru%C3%A7%C3%A3o_civil_pela_imprensa_durante_a_ditadura_militar_brasileira>. Acesso em: 15 set. 2021.

_____. *Corpos para o Capital: acidentes de trabalho, precarização e reabilitação profissional durante a ditadura militar brasileira (1964-1985)*. Paco e Littera, 2019.

SOARES, Gláucio Ary Dillon. *A Censura durante o Regime Autoritário*. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 4, n. 10: p. 21-43, jun. 1989.

SODRÉ, Nelson Werneck. *História da Imprensa no Brasil*. 3ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1983.

THOMPSON, Edward Palmer. *As peculiaridades dos ingleses e outros artigos*. 2. ed. Campinas, SP: UNICAMP, 2012

**A Assessoria Especial de Segurança e Informação da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (AESI/UFRGS): uma engrenagem
repressiva da ditadura civil-militar**

The Special Security and Information Advisory of the Federal University of Rio Grande do Sul (AESI/UFRGS): a repressive gear of the national security dictatorship

Letícia Wickert Fernandes¹

Introdução

Este resumo expandido é resultado de reflexões apresentadas no *Simpósio Temático 17 - A ditadura civil-militar brasileira (1964-1988) em novos olhares e abordagens*, durante o V Encontro Discente de História da UFRGS, evento ocorrido em outubro de 2021. A escolha pela temática foi elaborada a partir dos resultados da dissertação de mestrado da autora, defendida em agosto de 2021 pelo Programa de Pós-Graduação em História da UFRGS (FERNANDES, 2021).

As Assessorias Especiais de Segurança e Informação (AESI ou ASI) foram órgãos setoriais de informação criados em cada órgão público federal, como uma extensão do Serviço Nacional de Informações (SNI) nos organismos, fundações e empresas públicas federais, como Correios, Petrobrás, Funai, IBGE, bancos, universidades, dentre outros, funcionando de forma muito semelhante às Divisões de Segurança e Informação (DSI), instituídas por sua vez nos ministérios civis e

¹ Mestre, licenciada e bacharelada em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Contato: letwfernandes@gmail.com.

ligadas ao SNI (ISHAQ; FRANCO; SOUSA, 2012, p. 61). Essas setorizações foram responsáveis por expandir o poder de vigilância da ditadura como uma medida de controle da suposta subversão nas repartições federais e ministérios civis.

Nas universidades, as AESI foram fundadas a partir de 1971, submetidas à DSI do MEC e ao SNI, operando como uma extensão do poder do SNI nos campi, que através delas fazia chegar pressões políticas dos escalões superiores, exercendo também um papel de vigilância sobre a comunidade universitária e seus dirigentes (MOTTA, 2008a, p. 36). Na documentação da comunidade de informações da ditadura, recolhida ao Arquivo Nacional em 2005 em cumprimento ao Decreto 5.584, quase 7 mil dossiês sobre as Assessorias foram identificados, revelando a existência de 249 divisões ou assessorias específicas, dentre elas a AESI da Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi constatada (ISHAQ; FRANCO, 2008, p. 36).

Conforme Vivien Ishaq e Pablo Franco (2008, p. 36-37), a documentação referente à DSI do MEC e à maioria das AESI instaladas nas universidades, no entanto, não foi recolhida. Em razão disso, o Sistema de Informações do Arquivo Nacional (SIAN) não possui um fundo documental específico para a AESI da UFRGS. Alguns vestígios documentais das atividades deste órgão, no entanto, podem ser acessados por meio de outros fundos documentais, como o Fundo do Serviço Nacional de Informações (SNI), disponível para pesquisa no SIAN, tendo em vista a circulação de documentos dentro da comunidade de informações. Estima-se que apenas 30% dos acervos dos órgãos setoriais da comunidade de informações

da ditadura foram recolhidos e, embora pareçam quantitativamente poucos (o que de fato são), “esses registros documentais são de grande importância para que se possa conhecer a profundidade da vigilância e do controle da ditadura em órgãos da administração pública, instituições, empresas e universidades” (STAMPA; SANTANA; RODRIGUES, 2014, p. 58).

A AESI da UFRGS

Apesar do estabelecimento oficial das AESI nos campi universitários ter acontecido somente a partir de 1971, de acordo com Motta (2008a, p. 60), a Divisão de Segurança e Informação (DSI) do MEC vinha solicitando aos reitores, desde 1968, a nomeação de pessoas vinculadas ao governo ditatorial a fim de manter os interesses do Estado nas instituições de ensino superior. O caso da UFRGS é muito claro quanto a isso. A AESI da universidade foi chefiada pelo coronel Natalício da Cruz Corrêa, entre 1971 e 1979 (período de atuação do órgão), e era fisicamente localizada no gabinete do militar no quinto andar do prédio da reitoria da UFRGS.

Apesar da cronologia definida, o coronel Corrêa vinha ocupando, desde 1968, junto à reitoria de Eduardo Faraco (1968-1972), um cargo denominado pelo militar de “quebra-galho”, conforme sua entrevista concedida ao jornal *O Rio Grande*, em 1979 (MOTTA, 2014, p. 520,9/1155). A partir de 1979, com o encerramento oficial das atividades da AESI da UFRGS, Corrêa continuou presente na reitoria da universidade ocupando o cargo de “assessor especial do reitor”, cujas atribuições específicas não foram esclarecidas. Desta forma, é possível compreender que a presença do cel. Natalício Corrêa em cargos diretamente ligados à reitoria da

UFRGS é tanto anterior quanto posterior à sua passagem pela AESI. Como um militar representante dos pilares ideológicos do Estado, Corrêa esteve presente desde 1968 como “quebra-galho” na reitoria e, inclusive, após 1979, permanecendo na universidade mesmo após sua dispensa do órgão de Assessoria.

Nos registros consultados, a AESI/UFRGS é frequentemente consultada pela Agência de Porto Alegre do SNI para a elaboração das Fichas Sintéticas de Avaliação de diversas pessoas, especialmente professores e funcionários da administração universitária. Para Ishaq e Franco (2008, p. 35), “o conjunto dos documentos produzidos pelas DSI e ASI forma um grande arquivo sobre a vida funcional dos servidores públicos do período”, cujos registros embasavam as sugestões de atos administrativos em corroboração com a garantia de manter os inimigos internos do regime afastados das repartições públicas. As Fichas Sintéticas de Avaliação eram recursos documentais desenvolvidos pelos órgãos de informações da ditadura brasileira para reunir, da forma mais objetiva possível, a descrição das principais características psicossociais e comportamentais identificadas no Levantamento de Dados Biográficos de um indivíduo, a fim de classificá-lo como subversivo (ou não) e apto (ou não) para ser aproveitado em um cargo ou função em órgãos ou empresas do funcionalismo público federal.

Em razão disso, observa-se nos documentos do SNI a forte presença da AESI/UFRGS junto à comunidade de informações da ditadura para a elaboração de Fichas Sintéticas de Avaliação, informes e pareceres acerca de professores, estudantes, funcionários e candidatos a ingresso docente, não só consultando a

Agência de Porto Alegre do SNI para a obtenção de informações como também fornecendo informes sobre a instituição e colaborando para a tomada de decisões da reitoria da universidade. Para exemplificar, serão apresentadas três situações, dentre muitas outras identificadas, acerca da atuação da AESI como um órgão de articulação repressiva da ditadura junto à universidade.

Caso 1: o histórico da CEIS de 1964

Em 1976, o reitor Homero Jobim nomeou o professor Francisco Luis dos Santos Ferraz para o cargo de secretário geral de Planejamento da Universidade. No entanto, um dia antes da nomeação, o coronel Natalício Corrêa comunicou o reitor de que o professor Ferraz tinha um registro do relatório da Comissão Especial de Investigação Sumária (CEIS) de 1964 no seu Levantamento de Dados Biográficos. A CEIS foi instalada logo após o golpe com o objetivo de investigar professores e alunos da universidade que possuíam algum tipo de identificação com o governo de João Goulart ou vinculação com ideários de esquerda, cujos trabalhos embasaram a primeira leva de expurgos docentes e discentes da universidade em 1964 (MANSAN, 2009, p. 88). No relatório final da CEIS, após o encerramento das atividades da Comissão, o assessor militar responsável, general Jorge Cesar Garrastazu Teixeira, sugeriu que Francisco Luis dos Santos Ferraz, que na época foi investigado como estudante de Direito na UFRGS, não ocupasse “cargos de direção

e influência nas organizações estudantis, devendo ter sua ação vigiada enquanto frequentasse a Faculdade”.²

Figura 1 – Apreensão de nomeação

6. O Chefe da AESI/UFRGS, em 19 JUL 76, ao tomar conhecimento da nomeação do epigrafado para Secretário Geral de Planejamento da Universidade, quando recebeu ofício convite para a solenidade de posse, sabedor dos registros que revelavam suas atividades no ME de esquerda, entrou em contato com o Reitor HOMERO SÓ JOBIM, revelando sua apreensão com tal escolha. Na oportunidade, o Sr Reitor afirmou ter ciência de tais registros, mas que desconhecia qualquer atuação negativa de FRANCISCO FERRAZ após 1964, na sua vida profissional, e que tomara a medida inclusive levando em conta ter sido o referido Professor convidado recentemente para cargo de relevo na Administração Federal. O Sr Reitor não especificou para que cargo o Prof FERRAZ foi convidado.

Fonte: ARQUIVO NACIONAL. BR DFANBSB V8.MIC, GNC.GGG.83007605.

Disponível em: <http://sian.an.gov.br/>. Acesso em: 12 abr. 2020. Grifo da autora.

Apesar do contato feito pelo chefe da AESI com o Reitor, em relação a uma possível “apreensão” pela nomeação de Ferraz, o reitor afirmou ter conhecimento de tais registros e que nomearia o professor para o referido cargo por ele já ter sido convidado para outra função da administração federal. Neste caso primeiro caso, a sugestão da AESI/UFRGS parece não ter alterado substancialmente a decisão da reitoria, apesar da recomendação ter sido significativamente sugestiva. Em diversos outros momentos é observado o poder de veto da Assessoria sobre a trajetória acadêmica e profissional de diversos professores e estudantes na UFRGS.

Caso 2: a formação estrangeira

² ARQUIVO NACIONAL. BR DFANBSB V8.MIC, GNC.GGG.83007605. Disponível em: <http://sian.an.gov.br/>. Acesso em: 12 abr. 2020.

Muitos dos registros que citam a AESI/UFRGS estão relacionados à deliberação sobre a concessão de algum direito, benefício ou oportunidade, como cargos de chefia ou direção das faculdades e departamentos, vagas como docentes na universidade ou concessão de bolsas de estudos para alunos. De maneira geral, a AESI aparece frequentemente sendo consultada pela Agência de Porto Alegre do SNI para a elaboração de fichas biográficas de indivíduos com base em seus históricos, que eram então processadas pelos órgãos de informações e transformadas em produto de inteligência para dar suporte a tais decisões, sendo também parâmetros de julgamento moral e ideológico. Nesse sentido, a vigilância da ditadura ficava alerta especialmente em relação a profissionais em cujos currículos havia a formação acadêmica em países do bloco soviético, .

[...] a atuação das ASI revela verdadeira obsessão em impedir a infiltração comunista e soviética nas universidades, dedicando-se, por exemplo, a monitorar o ensino de russo nas instituições brasileiras e a vigiar os estudantes retornados da URSS com diplomas obtidos naquele país. (MOTTA, 2008b, p. 45)

Um exemplo disso é o caso de Alejandro Borges Casalás, uruguaio que frequentou a Universidade da Amizade dos Povos Patrice Lumumbe na União Soviética e candidatou-se para o cargo de pesquisador em Ciências da Natureza na UFRGS em 1978. Na ocasião, Casalás, teve seus registros considerados “desabonatórios”: o único registro mencionado de fato foi uma menção a sua formação acadêmica na universidade soviética. Em inscrição manuscrita no documento, consta uma anotação que diz: “Obs: em 13 DEZ 78 a ASI/UFRGS

informou ter desaconselhado o ingresso do epigrafado na Universidade”.³ A recusa pode ser compreendida como parte da aversão da ditadura brasileira a toda e qualquer relação com o bloco soviético no contexto da Guerra Fria. Tal aversão era ainda mais intensificada no caso de profissionais que atuariam no ensino superior, sintetizando a recusa da possibilidade de que qualquer ideologia considerada “inimiga” pudesse adentrar no ensino público.

Figura 2 – AESI/UFRGS desaconselhando o ingresso

CONFIDENCIAL 60010

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Departamento Central de Informações

Porto Alegre, 30 NOV 1978

1. Assunto: ALEJANDRO BORCHE CASALÁS - CANDIDATO A INGRESSO NA UFRGS
2. Origem: DCI/SSP/RS
3. Avaliação: A-1
4. Difusão: E2/ III EX - APA/SMI - SR/DFP/RS
5. Referência:
6. Difusão desde a origem: 1-1
7. Anexo: -.-

I N F O R M E Nº 12-1161/78 /DCI/SSP/RS

1. ALEJANDRO BORCHE CASALÁS, filho de Carlos Borché e de Elvira Casalás, casado com Susana Rita Terra, nascido em Montevideo/ROU a 17 JUL 47, residente na Av Assis Brasil, nº 583, aptº 303/POA/RS, é candidato a ingresso como Pesquisador em Ciências Exatas e da Natureza, junto ao Instituto de Pesquisas Hidráulicas na UFRGS.

2. O nominado frequentou a Universidade AMIGO DOS POVOS Patrice Lumumba (UAFPL/URSS).

3. Atendendo FB da ASI/UFRGS foi difundido que o nominado registra antecedentes desabonatórios neste O.I.

Obs: em 13/03/79 a ASI/UFRGS informou ter desaconselhado o ingresso do epigrafado na Universidade

Fonte: ARQUIVO NACIONAL. BR DFANBSB V8.MIC, GNC.GGG.78000010.

Disponível em: <http://sian.an.gov.br/>. Acesso em: 08 jun. 2019. Grifo da autora.

Caso 3: a suposta falta de verbas

Por fim, o terceiro caso a ser destacado consiste na interferência da AESI/UFRGS na contratação do professor italiano Giuseppe Gillardini, que veio ao

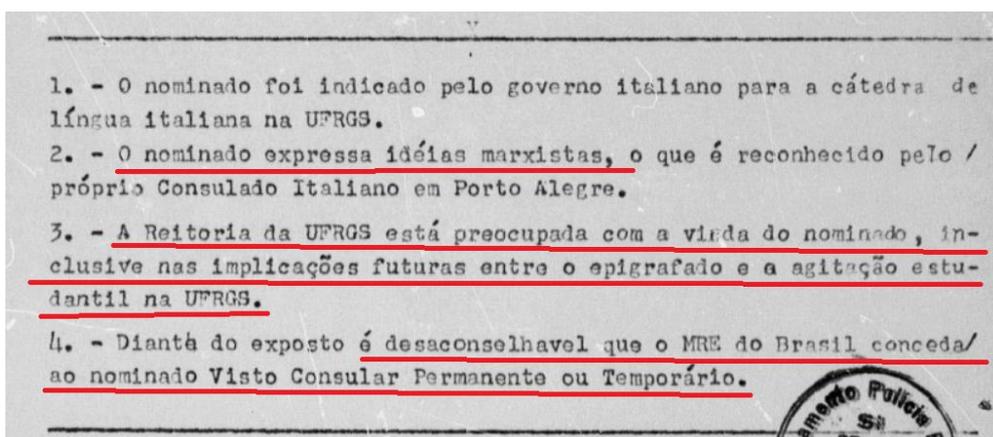
³ ARQUIVO NACIONAL. BR DFANBSB V8.MIC, GNC.GGG.78000010. Disponível em: <http://sian.an.gov.br/>. Acesso em: 08 jun. 2019.

Brasil na década de 1970 a fim de lecionar aulas de italiano na UFRGS. De acordo com uma informação da DSI do Ministério das Relações Exteriores (MRE), o professor foi indicado pelo governo italiano para atuar na UFRGS em um programa de intercâmbio estabelecido com a Universidade, em razão das celebrações do centenário da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Gillardini viria à UFRGS em reciprocidade à indicação do professor da UFRGS que foi para a Universidade de Roma, na Itália. Todavia, a UFRGS foi desaconselhada a aceitar Gillardini em razão das informações que a embaixada do Brasil em Roma, através do MRE, passou sobre os antecedentes políticos do professor.

Apesar da insistência do Consulado Italiano em Porto Alegre, “o professor GILARDINI não foi aprovado pela Universidade” por ser considerado “persona non grata” devido ao seu histórico profissional e perfil político-ideológico descrito como “marxista”. Em um informe da AESI, constava que Gillardini lecionou em Sarajevo, na antiga Iugoslávia, assim como em Moscou (URSS), comunicando que no Brasil “os encargos financeiros de sua presença aqui, correriam por conta exclusiva do governo italiano”.⁴

Figura 3 – Implicações para a agitação estudantil na UFRGS

⁴ ARQUIVO NACIONAL. BR DFANBSB V8.MIC, GNC.GGG.81003028. Disponível em: <http://sian.an.gov.br/>. Acesso em: 25 mar. 2020.



Fonte: ARQUIVO NACIONAL. BR DFANBSB V8.MIC, GNC.GGG.81003028.

Disponível em: <http://sian.an.gov.br/>. Acesso em: 25 mar. 2020.

A AESI, então, relatou que o diretor do Instituto de Letras foi chamado pela reitoria para que comunicasse ao italiano que, devido à “falta de verbas”, sua indicação para lecionar na universidade não poderia ser atendida; “tal medida foi cumprida e a nomeação não foi efetivada”, conforme o documento. A partir disso, conclui-se que a recusa da UFRGS em aceitar Gillardini não ocorreu devido à suposta “falta de verbas”, como de fato lhe comunicaram, tendo em vista que nem a Universidade ou qualquer repartição do governo brasileiro arcaria com os custos da docência do italiano na instituição, que corriam exclusivamente pelas contas do governo da Itália. Percebe-se, desta forma, que havia uma troca de informes e negociações entre diversos órgãos de informações, tanto ministeriais e universitários quanto consulares, para a deliberação da contratação do professor Giuseppe Gillardini, e que sua recusa, de fato, deveu-se pelo seu histórico de docência em países que compunham o bloco inimigo (soviético) e pelo seu perfil ideológico considerado “marxista”. Tal perfil profissional era visto como uma ameaça que

poderia influir na “agitação estudantil” da UFRGS, tornando o professor italiano um potencial inimigo interno no meio universitário da instituição.

Considerações finais

De maneira frequente e dialógica, a AESI/UFRGS solicitava à comunidade de informações os registros acerca de candidatos a vagas para o corpo docente da universidade, assim como também trabalhava junto à reitoria para influir sobre as decisões de nomeação de pessoal a cargos de direção e chefia de faculdades e departamentos, fornecendo também à Agência de Porto Alegre informações acerca da comunidade universitária, como professores, funcionários e estudantes. Nesse sentido, é possível compreender a AESI/UFRGS como parte pertencente da engrenagem de repressão político-ideológica e da comunidade de informações da ditadura, inserida no meio universitário como um órgão representante dos interesses do Estado no período. Apesar da AESI/UFRGS ser um órgão pouco trabalhado pela historiografia, especialmente devido à dificuldade de acesso à sua documentação, é possível ter verificar alguns de seus registros através de consultas a outros acervos, como o Fundo do SNI, disponível no SIAN. A análise da atuação e articulação da AESI/UFRGS com a comunidade de informações é fundamental para a compreensão da história da universidade durante a ditadura, uma tarefa de compromisso com a verdade e memória da repressão institucional, para que não se esqueça e nunca mais aconteça.

Referências

ARQUIVO NACIONAL. BR DFANBSB V8.MIC, GNC.GGG.78000010. Disponível em: <http://sian.an.gov.br/>. Acesso em: 08 jun. 2019.

ARQUIVO NACIONAL. BR DFANBSB V8.MIC, GNC.GGG.81003028. Disponível em: <http://sian.an.gov.br/>. Acesso em: 25 mar. 2020.

ARQUIVO NACIONAL. BR DFANBSB V8.MIC, GNC.GGG.83007605. Disponível em: <http://sian.an.gov.br/>. Acesso em: 12 abr. 2020.

FERNANDES, Letícia Wickert. *Sob a mira da inteligência: os registros do Serviço Nacional de Informações sobre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1964-1985)*. Dissertação (Mestrado em História), Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2021.

ISHAQ, Vivien; FRANCO, Pablo. Os acervos dos órgãos federais de segurança e informações do regime militar no Arquivo Nacional. *Revista Acervo*, Rio de Janeiro, v. 21, nº 2, p. 29-42, jul./dez. 2008.

ISHAQ, Vivien; FRANCO, Pablo; SOUSA, Tereza. *A escrita da repressão e da subversão (1964-1985)*. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2012.

MOTTA, Rodrigo Patto Sá. *As universidades e o regime militar: cultura política brasileira e a modernização autoritária*. E-book. São Paulo: Zahar, 2014.

MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Incômoda memória: os arquivos das ASI universitárias. *Revista Acervo*, Rio de Janeiro, v. 21, n. 2, p. 45-66, jul./dez. 2008b.

MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Os olhos do regime militar brasileiro nos Campi. As Assessoriais de Segurança e Informações das Universidades. *Topoi*, v. 9, n. 16, p. 30-67, jan.-jun. 2008a.

STAMPA, Inez; SANTANA, Marco A.; RODRIGUES, Vicente. Direito à memória e arquivos da ditadura: a experiência do Centro de Referência Memórias Reveladas. In: THIESEN, Icléia (Org.) *Documentos sensíveis: informação, arquivo e verdade na ditadura de 1964*. Rio de Janeiro: 7Letras, 2014.